

EL CONFLICTO SOCIAL EN LA FRANCIA SOCIALISTA (*)

Suzanne Berger

Una década y media después de las huelgas de mayo/junio de 1968 en Francia y del otoño caliente de 1969 en Italia, la política de masas en esos dos países ofrece un marcado contraste. En Italia, la enorme manifestación de marzo de 1984, organizada por la CGIL, y el millón de personas que acudió en Roma al funeral del dirigente del PCI Enrico Berlinguer, señalan la posición central del movimiento de la clase obrera en la política. En ese mismo mes de junio, más de un millón de franceses protestaban en las calles de París contra la regulación estatal de los colegios católicos, en la manifestación más grande del período de postguerra. La antigua cuestión republicana de las relaciones Estado/Iglesia movilizó a oponentes y partidarios del gobierno socialista como no ha podido hacerlo ninguna cuestión de política económica desde la victoria de Mitterrand en mayo de 1981.

Ambos junios reflejan profundas diferencias en la política francesa e italiana. ¿Pueden éstas entenderse como diferencias políticas entre sociedades en períodos más o menos avanzados de desarrollo capitalista, como sugiere Sidney Tarrow (1) en un sugestivo análisis de los dos países a finales de los sesenta? O, como han afirmado Michele Salvati y Alfredo Gigliobianco, en una com-

paración entre el mayo francés y el otoño caliente de Italia, ¿son los diversos resultados en los dos países el producto de la política, es decir, están relacionados principalmente con las prioridades y capacidades de los partidos políticos y el Estado, más bien que con la composición y peso relativo de las clases sociales tradicionales y modernas, y sus coaliciones en una época de transición socio-económica? (2). Aquí solamente me propongo examinar la evolución de la protesta política en Francia en el período de gobierno socialista. Con respecto a muchas de nuestras teorías acerca del desarrollo político en sociedades industriales avanzadas, el caso de Francia bajo el poder socialista es, de hecho, extraordinariamente desconcertante. La necesidad de clarificar lo que ha ocurrido, antes de compararlo con el panorama italiano, puede quizá justificar esta contribución unilateral al debate que han comenzado Tarrow, Salvati y Gigliobianco acerca de estos dos países.

Vamos directamente al asunto: los enigmas fundamentales de la experiencia francesa desde 1981 son las estrategias anti-corporatistas del gobierno para tratar con los grupos sociales, y el arcaísmo político de los movimientos mayoritarios de protesta. El ejemplo más chocante de éstos es la movilización de masas ante el contencioso de la

escuela católica; pero las manifestaciones violentas de los campesinos, el resurgimiento de los movimientos «poujadistas» de las clases medias independientes y el crecimiento de la extrema derecha también tienen en común esta cualidad de repetición histórica. Se propone aquí el argumento de que los factores que explican el primer fenómeno también explicarán el segundo, esto es, que los elementos que determinan la voluntad política para preservar la autonomía del Estado y para ampliar el área de sus actividades, incluso a costa de una considerable tensión social, darán lugar además a peculiares formas de protesta.

ANTICORPORATISMO

En la extensa literatura sobre el corporatismo y el neocorporatismo, hay un acuerdo general sobre que en la Francia actual éste se da poco, tanto si se entiende el corporatismo como una manera de organizar los intereses funcionales en conflicto o como una forma de definir y llevar a cabo la política, para citar la distinción en los términos de Schmitter (3). Hay varias explicaciones *standard* para esto. Es más probable que el corporatismo emerja y se extienda bajo los auspicios de gobiernos socialdemócratas pero, desde finales de los años cuarenta hasta 1981, Francia ha tenido una experiencia de gobierno de centro-derecha, interrumpida solamente por breves intervalos de gobiernos radicales en la Cuarta República y por el malogrado gobierno de liderazgo socialista de Guy Mollet, en 1956.

Por otra parte, se dice que los capitalistas franceses han disfrutado de una posición tan fuerte en la sociedad y en el Estado que tenían relativamente poco interés en soluciones corporatistas. Así Tarrow, al hablar del tema en el artículo citado, defiende la existencia de una clase empresarial muy fuerte en Francia, poderosa «en parte por su influencia en un sector del partido gaullista, pero básicamente por su hegemonía en la sociedad francesa». Es difícil reconciliar totalmente este punto de vista con las extraordinarias concesiones hechas por los empresarios para intentar mantener la paz social en un contexto de creciente desempleo, e intentar mantener en el poder al centro derecha. Los empresarios aceptaron la regulación estatal de los despidos, altas tasas de ayuda al desempleo y un desenfrenado aumento en las cargas de los *prélèvements obligatoires* (im-

puestos más pagos a la Seguridad Social). Giscard d'Estaing dijo una vez que cuando los *prélèvements obligatoires* ascienden a más del 40 % del producto nacional bruto un país es socialista. Según este criterio, la transición al socialismo debería fecharse en su propia presidencia. Pero aunque los empresarios franceses aceptaron estos sacrificios, si no en silencio, por lo menos sin tanta indignación pública como la que mostrarían bajo el gobierno socialista, la clase empresarial no se sintió obligada a buscar nuevas relaciones con los obreros.

Finalmente, los sindicatos franceses, lejos de dirigirse hacia la unidad y el monopolio organizativo —una condición previa extremadamente importante, si no imprescindible, para el neocorporatismo—, permanecieron profundamente divididos por sus afiliaciones a los partidos, conflictos ideológicos y cálculos estratégicos. Sus organizaciones centrales permanecieron débiles, incapaces, por lo tanto, de disciplinar a sus miembros e incapaces, asimismo, de llevar a cabo el tipo de negociaciones que implica la política corporatista.

Estos obstáculos para el florecimiento del corporatismo en Francia debieron reducirse seriamente con la victoria de los socialistas en 1981. Según la mayoría de las interpretaciones de los textos neocorporatistas, se habría pronosticado que un gobierno socialista en Francia ampliaría las relaciones corporatistas entre los grupos sociales y el gobierno. La llegada al poder de un gobierno de socialistas y comunistas debería haber aumentado la voluntad de la clase obrera o, por lo menos, de los dirigentes y organizaciones de la clase obrera, para sacrificar los intereses a corto plazo, como requieren los pactos corporatistas, sobre los salarios. Su disposición hacia el sacrificio podría haberse esperado por tres razones: Primero, los líderes de los sindicatos socialista y comunista se juegan mucho en el éxito de un gobierno de izquierdas. Por lo tanto, deberían estar dispuestos a frenar a sus miembros, para ayudar al gobierno, mientras que previamente no habían tenido interés en facilitar la tarea del Estado de acortar la inflación e incrementar la productividad.

Además, tanto los líderes de la clase obrera como los miembros de los sindicatos podrían haber esperado con razón que los sacrificios a corto plazo en sus salarios fueran compensados en otras esferas: bajo la forma de una nueva participación

en la empresa, con incrementos en los gastos sociales (pensiones, asignaciones familiares, beneficios por enfermedad, etc.). Finalmente, los sindicatos deberían haber estado más dispuestos a creer que los sacrificios a corto plazo en el marco de los acuerdos corporatistas se convertirían realmente en cambios estructurales permanentes de la economía, en una inversión más productiva, y finalmente en un nivel más alto para todos. Un gobierno socialista garantizaría, según palabras de Peter Lange, que los sacrificios de los trabajadores conducirían, no como en el pasado a beneficios y especulaciones, sino a la modernización del sistema económico y al desarrollo (4).

Después de 1981 se podría haber anticipado no solamente una mayor disposición por parte de los sindicatos para unirse a los acuerdos corporatistas, sino también una mayor voluntad por parte de los capitalistas, ahora castigados por la salida del poder del partido «natural» de los empresarios y por el gran número de nacionalizaciones (5). Es más, se supone que el gobierno mismo tenía un interés mayor que sus predecesores de centro-derecha por promocionar algún tipo de negociaciones tripartitas con el trabajo y el capital, especialmente una vez que llegaron a ser importantes los problemas para controlar la inflación y reducir el nivel de déficit en las empresas, lo cual ocurrió al final del primer año de mandato socialista. Como mínimo, el gobierno de Mauroy debería haberse interesado por conservar aquellos acuerdos corporatistas heredados que habían servido para contener los conflictos sociales como, por ejemplo, los de la agricultura.

A pesar de todos estos cambios, que teóricamente deberían haber conducido a una expansión del corporatismo, ha ocurrido de hecho, todo lo contrario. Una de las primeras acciones de los socialistas en el poder fue destruir el único sistema corporativo amplio que encontraron en funcionamiento: las relaciones entre el Estado y la agricultura.

La Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) y sus aliados habían tenido acceso exclusivo a la sesión anual de negociaciones con el gobierno sobre subsidios, precios y política agrícola, y una situación de monopolio virtual en las comisiones que canalizaban los fondos públicos hacia el campo (6). A cambio, la FNSEA había controlado a sus miembros, ponien-

do fin a las oleadas de malestar y violencia campesina que habían desestabilizado los primeros años de la Quinta República. En un intercambio típicamente corporatista, la FNSEA disciplinó a los campesinos, y los gobiernos de la Quinta República, a partir de los años sesenta, denegaron a cualquier asociación agrícola rival, tanto de derechas como de izquierdas, la participación en las negociaciones entre la «profesión agrícola» y el gobierno. El Estado canalizó hacia las comisiones locales y regionales, en las cuales la FNSEA tenía acaparado casi todo el poder, créditos, pensiones, préstamos, subsidios y la autoridad para resolver las disputas sobre la venta de tierras y determinar los acuerdos sobre ayudas a la cosecha. Para la época de la victoria socialista, en 1981, el resultado era un virtual monopolio organizativo en el sector agrícola y casi dos décadas de paz social sin precedentes en el campo.

Esta elaborada construcción fue deshecha casi instantáneamente. Un mes después de la victoria socialista, la nueva ministro de Agricultura declaró que ella no veía la razón por la cual solamente se debía admitir a la FNSEA a las rondas negociadoras anuales (7). Las otras organizaciones agrícolas deberían participar también, ya que ellos representaban asimismo a un considerable número de agricultores. Declaró que el gobierno tenía la intención de «terminar con la confusión entre el papel de las organizaciones profesionales y el del Estado. Aquéllas deben negociar e impugnar si lo consideran necesario; el Estado debe tomar las decisiones» (8). La consecuencia de esta línea de razonamiento, irrefutablemente democrática, y de la destrucción del corporatismo que la siguió cuando las organizaciones agrícolas rivales participaron con la FNSEA en las sesiones y comisiones con el gobierno, fue la de llevar a los campesinos de nuevo a las barricadas. La protesta violenta alcanzó niveles que no habían sido vistos desde «la guerra de las alcachofas» en los primeros años 60. La FNSEA no solamente se negó a ponerse al lado de la ley y el orden en el campo y frenar a sus miembros. La FNSEA misma tenía que dirigir la protesta para demostrar a sus miembros — muchos de los cuales habían llegado a pensar que estaba demasiado ligada al Estado como para representar los intereses agrícolas — que era el auténtico defensor de los campesinos. La FNSEA tenía que demostrar también a los socialistas que sin su mediación no podría lograrse nada en el campo.

Con respecto a las organizaciones empresariales, los socialistas también siguieron una estrategia anticorporatista. Una de las primeras decisiones socialistas fue intentar amortiguar la intensidad de las hostilidades de los empresarios, debilitando la principal organización del *patronat*, el Conseil National du Patronat Français (CNPF). Para hacer esto, el gobierno fomentó la rebelión de una asociación representante de la mediana y pequeña empresa, el Syndicat National de la Petit et Moyenne Industrie (SNPMI) (9). No obstante el entusiasmo «vichysta» de Gérard Deuil, presidente del SNPMI, le fueron abiertas las puertas de los ministerios por los socialistas. El gobierno reconoció virtualmente el derecho de esta organización a representar los intereses de las empresas sobre una base de igualdad con la CNPF (10).

Los resultados de los intentos socialistas para modificar la configuración de las organizaciones de intereses en agricultura e industria fueron básicamente los mismos en ambos casos. La estrategia anticorporatista del gobierno resultó, en primer lugar, en un fortalecimiento de los que desafiaban a las organizaciones dominantes. El SNPMI incrementó su número de votos en las elecciones *prud'homales* de un 2 % en 1979 a un 14,7 % en 1982 (11). Los rivales de la FNSEA también mejoraron su imagen en las elecciones profesionales, aunque no tanto como el gobierno podría haber esperado (12).

La consecuencia inmediata fue la de empujar a la supuesta víctima no a adoptar una actitud más cooperadora, sino más bien hacia un cuadro de exigencias más amplio con respecto a la política gubernamental, cuando la organización fue obligada a demostrar a sus miembros que ella era, de hecho, la mejor defensora de los intereses del grupo. El «déficit» de legitimidad producido por la retirada del reconocimiento por parte del Estado hacia el grupo como interlocutor privilegiado, llevó tanto a la FNSEA como a la CNPF a reforzar su relación con los miembros, formulando las reivindicaciones de una manera más agresiva.

Al mismo tiempo, el señuelo del reconocimiento oficial no funcionó para «domesticar» a los competidores de la organización principal. El SNPMI dedicó esfuerzos cada vez más grandes a movilizar a una clase media tradicional cada vez más agitada. En septiembre de 1982, Deuil convocó un mitin multitudinario en París, y quince mil perso-

nas fueron a escucharle atacar al gobierno y a la CNPF, el «Consejo Nacionalizado del Patronato Francés», según sus sarcásticas palabras (13). Las denuncias contra políticos, tecnócratas y profesores en el gobierno, y contra el gran capital integrante de la CNPF, se hacían eco de los antiguos *slogans* poujadistas. La presencia en el mitin de Jean-Marie Le Pen, presidente del Frente Nacional, contribuyó a la *puesta en escena* de una alianza ya bien conocida. La retórica y las manifestaciones se tornaron en violencia, y grupos que actuaban bajo las consignas del SNPMI bloquearon autopistas y vías férreas, invadieron la Bolsa y acosaron a los funcionarios públicos.

Al igual que con el aprendiz de brujo, resultó más fácil desafiar a la CNPF y a la FNSEA que poner fin a estos desafíos. Una vez que los atacantes descubrieron que las manifestaciones de masas contra el gobierno eran más eficaces que las polémicas contra el «hermano» enemigo, los socialistas no pudieron controlar las fuerzas que ellos mismos habían desatado. De hecho, cuando la rivalidad intensificada entre las organizaciones llevó a una escalada de reivindicaciones contra el Estado, y los intereses previamente desorganizados o débilmente organizados —agentes de viaje, camioneros, doctores y estudiantes de medicina, etcétera—, fueron movilizados por las decisiones socialistas, la política en la calle llegó a ser un serio problema para el gobierno.

La explicación más obvia del anticorporatismo de los socialistas es el deseo de debilitar a los poderosos grupos de interés, cuya resistencia fue entendida como un peligro para la ejecución de un amplio programa de reforma, y, en general, como una amenaza al nuevo orden político. Pero incluso respecto a la agricultura y a la industria, dos grupos claramente hostiles, son obvios los límites de esta explicación, una vez que se ha considerado el daño causado por el intento de romper el monopolio de representación de la CNPF y la FNSEA, reconociendo las reivindicaciones de sus rivales. Además, esta explicación apenas ilumina las relaciones del gobierno con los sindicatos. ¿Por qué se negaron los socialistas a animar las tendencias corporatistas del movimiento obrero hacia una participación en la toma de decisiones sobre desempleo, salarios y horarios, y reconversión industrial?

Hay que admitir que la división del movimiento

sindical francés en federaciones laborales competitivas y rivales, y el auge de Force Ouvrière (FO), difícilmente crean unas circunstancias propicias para el desarrollo corporatista. Pero, teniendo en cuenta todas las presiones a favor de la competencia, es de destacar hasta qué punto los sindicatos estaban, de hecho, dispuestos a acercarse a unos arreglos más corporatistas (14). Tanto la CFDT como la CGT ofrecieron ejemplos clarísimos. Para reducir el paro mediante el reparto del trabajo, la CFDT se ofreció para participar en negociaciones sobre la reducción de las horas de trabajo semanales, con una caída concomitante de los salarios. La rama sobre la cual la CFDT se había aventurado fue serrada por Mitterrand, quien anunció que el gobierno acortaría la semana laboral, ¡manteniendo al mismo tiempo el nivel salarial establecido! La CGT, por su parte, ha estado tan firmemente comprometida con el éxito del gobierno de izquierdas que ha estado dispuesta a apoyar una variedad de proyectos gubernamentales sobre despidos, incluso en las industrias en las cuales se concentraban las bases de los votantes sindicalistas. En la fábrica de Talbot-Poissy, por ejemplo, la CGT sacrificó a su delegada, una heroína de las luchas pasadas, haciéndola proclamar que el plan gubernamental de despidos era el mejor posible en estas circunstancias. A pesar de la voluntad de ambos sindicatos de defender al máximo los intereses de sus miembros (al menos los de corto plazo), el gobierno no quiso participar en ninguna relación corporatista, y rechazó sistemáticamente todas las propuestas del movimiento sindicalista y de los intelectuales cercanos al gobierno para unos acuerdos que se pareciesen a un acuerdo social.

POLITIQUE D'ABORD

¿Cómo podemos comprender el anticorporatismo de los socialistas? Parece bastante útil empezar aquí con una definición minimalista del corporatismo, entendiendo éste como una de las varias estrategias políticas para descargar al Estado de la responsabilidad de los resultados de su política en la sociedad y en la economía. En unas circunstancias en las que la intervención, por medio de la legislación y los decretos, genera tensiones, conflictos y esperanzas insatisfechas, y en consecuencia, una ilegitimación del gobierno, los Estados modernos han recurrido cada vez más a es-

trategias de desentendimiento político para poder conservar su autoridad. Entre las circunstancias en las cuales la acción gubernamental erosiona la autoridad política y produce la situación que se ha descrito como «ingobernabilidad», las tres siguientes han sido especialmente importantes. Primera, cuando el gobierno interviene en un sector, esto suscita frecuentemente conflictos latentes entre los grupos sociales, o acentúa viejas tensiones. El ejemplo de la agricultura francesa, discutido anteriormente, es típico: la política modernizadora del gobierno a principios y mediados de los años sesenta no solamente generó protestas contra el Estado, sino también conflictos violentos entre los grupos rurales. Las nuevas leyes que permitieron a los entes públicos decidir qué agricultores podían comprar unas determinadas tierras, qué tipo de fincas eran apropiadas para hipotecas y cuales no, qué tipos de cultivos serían apoyados, etc., suscitaban amargas controversias que perturbaron el orden social del campo. Fue como reacción a esta situación como los gobiernos de centroderecha empezaron a promocionar los acuerdos corporatistas que los socialistas desmantelaron en 1981.

Segunda, los gobiernos pueden recurrir al corporatismo cuando la alternativa es recurrir a la coerción. La coerción directa por parte del Estado es al mismo tiempo ilegítimadora e ineficaz en las sociedades democráticas liberales, como ha sostenido Leo Panitch en su discusión sobre los casos de Gran Bretaña y Suecia en los años setenta (15).

Finalmente, y quizá sea éste el factor más importante, que desde mediados de los años sesenta ha llevado a los gobiernos a unas estrategias corporatistas, la identificación del Estado con los resultados económicos ha sido una fuente creciente de debilitación del gobierno. La gran novedad histórica de las relaciones Estado-economía en el período de posguerra fue que, por primera vez, los gobiernos llegaron a definir su misión de promotores del crecimiento y la estabilidad económica en general. Anteriormente los gobiernos habían identificado a ciertos sectores o empresas como esenciales para el poder y la prosperidad nacionales, e intervinieron para proteger y hacer avanzar esas actividades. Pero la noción del crecimiento como atribución exclusiva de la economía en su totalidad, más aún, de que el gobierno fuera responsable de ella, estaba ausente. Incluso en Fran-

cia, donde un pasado mercantilista permaneció en forma de proteccionismo, y donde la tradición *étatiste* fue más fuerte que en ninguna otra parte, éstas eran ideas desconocidas antes de la guerra. Como ha descrito Albert Sauvy, «lo que faltaba era el concepto del mecanismo que más tarde llamaríamos crecimiento». Este concepto no existía en el vocabulario económico, ni siquiera el término «producción — como distinto de *les affaires* — era de uso común» (16).

Después de la guerra se dieron ambas cosas, las herramientas conceptuales para considerar la economía como un todo, y la identificación política del crecimiento económico, concebido como un producto de la totalidad del sistema económico, con el poder nacional. Como ha manifestado François Fourquet sugestivamente, al explicar el compromiso del Estado con la economía en los años de la posguerra, la clase política había llegado a entender la ecuación: *croissance zéro puissance zéro* (17). Los mecanismos por los cuales los gobiernos intervinieron en la economía eran bastante diferentes según los distintos países, como han explicado Shonfield y Boltho: keynesianismo en Estados Unidos y Gran Bretaña, planificación indicativa en Francia, empresas públicas en Italia (18). Pero en todas partes la estrecha asociación del gobierno con el crecimiento y la prosperidad económica amplió el área de consenso social acerca del alcance y el contenido de la acción estatal. Simplificando demasiado: los buenos resultados económicos aumentaron el capital del Estado.

A finales de los sesenta, las políticas que parecían haber producido crecimiento, pleno empleo y estabilidad económica dejaron de funcionar; en todas partes los gobiernos se apresuraron a disociar sus políticas de sus consecuencias finales para la economía y la sociedad. Tomaron distintas direcciones. El neocorporatismo fue una de las formas de desentendimiento político que los gobiernos empezaron a utilizar a gran escala en los últimos quince años. El programa de Thatcher, en Gran Bretaña, es otra forma, que supone la redefinición del papel del gobierno en la economía, redescubriendo viejas nociones de *laissez-faire*, y nuevas formulaciones del monetarismo, que deniegan no sólo la posibilidad, sino incluso la conveniencia de que el gobierno actúe en la economía. El dualismo puede tomarse como otra vía por la que algunos gobiernos, especialmente el italia-

no, alejaron al Estado de la regulación, planificación y promoción de actividades, al menos en algunos sectores de la economía (19). Aunque estas estrategias sean diferentes en su origen e impacto, son, en cierto sentido, funcionalmente equivalentes: sirven para atenuar las conexiones entre la intervención del Estado y las consecuencias económicas y sociales, y de esta manera reducir el papel del gobierno, o al menos su evidencia, en un intento de erradicar algunas de las fuentes de descontento social hacia el gobierno.

El corporatismo, entendido como una estrategia más o menos elegida deliberadamente por el gobierno, es entonces una empresa que funciona solamente en la medida en que reduzca el área de la política. Desde esta perspectiva se esclarece la razón por la que los socialistas se vieron abocados a descartar las estrategias corporatistas. La irrupción en 1981 del partido socialista, fundado diez años antes en Epinay, se produjo a causa de un crecimiento extraordinario, y de una redefinición del alcance de la política. El partido no apostó simplemente por nuevas coaliciones a partir de los antiguos grupos de votantes. Tampoco se mantuvo la estrategia de «acaparar a todos los sectores electorales». El partido creció creando nuevos intereses políticos mediante la adhesión, movilización e incorporación de nuevos grupos. Efectuaron esto en parte cambiando el propio partido, abriendo la organización a nuevos participantes, y desmantelando las reglas y prácticas informales que habían protegido a los viejos notables del SFIO socialista en sus feudos. El partido de Guy Mollet había sido impenetrable y contrario a admitir nuevos grupos. La nueva generación de activistas de los años sesenta, que se introdujo en la política estudiantil, en las asociaciones de reforma de los gobiernos locales, en los movimientos tercermundistas, feministas y ecologistas, en la CFDT, y en un pequeño partido de izquierdas, el PSU, encontraba al SFIO arcaico y rechazable por las formas de participación que prevalecían en la organización. Como un dirigente del grupo de reforma de la política local de Grenoble contaba con disgusto: «Los socialistas pasan todas sus vacaciones veraniegas *juntos* en el mismo hotel. ¡Se besan en ambas mejillas cuando se encuentran!» (20).

Pero el defecto principal del partido socialista, desde la perspectiva de los que se unieron al nuevo partido después de Epinay, era la discrepancia

entre la retórica y los hechos: entre un lenguaje socialista *ouvrieriste* y el centralismo del SFIO en la práctica, y entre el programa del partido y el espectáculo de Guy Mollet cediendo ante los partidarios de la Argelia francesa. El nuevo partido socialista, lejos de abandonar esta ideología, radicalizó su programa. El partido se mostró más explícito sobre la política que seguiría si llegaba al poder. La alianza con los comunistas, y el lenguaje más radical de la lucha de clases, dio a entender que los socialistas estaban iniciando un camino hacia el poder totalmente diferente al que el SPD alemán había recorrido desde Bad Godesberg. Los nuevos programas e instituciones del partido socialista fueron enormemente fructíferos para atraer a sus filas a la moderna clase media. En contraste, en Italia estos mismos grupos participaban en nuevas formas de protesta social que convergían con la clase obrera disidente, según señala Tarrow (21).

El contenido del proyecto ideológico de los socialistas después de Epinay fue una amalgama de dos visiones irreconciliables a la larga. Por una parte existía la opinión de Mitterrand, Mauroy, Chevènement y la mayoría de los cuadros del partido a favor de un proceso de transformación social en el cual el partido y las instituciones del gobierno serían los principales promotores, y en el que el poder y la independencia de los actores sociales se percibían como un obstáculo para el cambio. Por otra parte, existía la perspectiva de lo que ahora se llama la *deuxième gauche*, el conjunto de los grupos entusiastas de la *autogestión*, la CFTD, Rocard, y muchos de los militantes de origen católico; todos ellos tenían en común un concepto del Estado, la burocracia y el partido como entidades que estrangulan el potencial para una renovación social espontánea, y creían que los grupos sociales, potenciados por una transferencia de poder y recursos hacia los lugares de trabajo y entidades locales, podrían llevar a cabo una transformación de la sociedad desde la base.

La primera visión era ampliamente mayoritaria en el partido (22). Ella inspiró un programa de reforma dirigido al crecimiento y reorganización del Estado. Este fue el programa que los socialistas procedieron a convertir en legislación y llevar a cabo inmediatamente después de las elecciones de 1981. Sus objetivos son significativamente distintos de la agenda «jacobina clásica». Si las nacionalizaciones eran, seguramente, una expansión

masiva del poder del gobierno central, la legislación descentralizadora eliminó, por el contrario, un importante número de mecanismos por medio de los cuales la burocracia central había operado en las localidades y regiones (23). Ambas reformas son, no obstante, partes coherentes del proyecto ideológico original, ya que ambas hacen referencia a un modelo de transformación en el cual el uso del «Estado» es central. El objetivo de las reformas descentralizadoras, como ha destacado Yves Mény, no fue en ningún sentido *autogestionnaire*. No hubo una cesión del poder por parte de los burócratas o políticos, sino más bien un cambio en la localización de la toma de decisiones de un estrato del gobierno a otro, y en la formación de gobiernos y asambleas electos en cada uno de esos estratos para asegurar su legitimidad democrática (24). Las transferencias de autoridad efectuadas por la legislación descentralizadora implicaron la *redistribución dentro del Estado*, y no, como en el corporatismo, una transferencia de responsabilidades de los cargos oficiales electos a los representantes socioprofesionales.

La oposición al gobierno entendió esa distinción perfectamente. François Guillaume, presidente de la FNSEA, la asociación agrícola «anteriormente oficial», atacó la descentralización porque conducía al triunfo de los intereses particulares. «A menudo una decisión, para ser buena y justa, tiene que ser tomada a un nivel más alto, para abarcar la totalidad del problema. El interés general no es la suma de las partes» (25). El corporatismo, que es llamado cogestión por Guillaume, permite esta defensa de los intereses generales. Según declara, porque está basado en la decisión de los profesionales, no de los políticos, y porque los profesionales están en una situación de monopolio.

«Tómese el caso de que hayan de ser distribuidas 60 hectáreas de tierra en un pueblo. Nuestra opinión es que los agricultores deberían reunirse alrededor de una mesa para discutir el problema, y tratar de formular una propuesta. Pero esto no será aceptado necesariamente por aquellos que tienen la responsabilidad de considerar el problema en su conjunto. Porque puede intervenir el egoísmo colectivo. Por ejemplo: ¿Qué ocurriría si decidiesen repartirse la tierra entre sí en lugar de dársela a un joven agricultor? Ellos pueden estar de acuerdo en tal solución y, si les fuera permitido, todos estarían muy contentos. Pero el interés general consiste en decir: "Lo siento, pero cada uno de vosotros ya tiene 100

hectáreas, no necesitáis esas 60. Se las vamos a dar a un joven agricultor. Decidido". Pueden imaginarse lo que sucedería si los políticos estuvieran mezclados en semejantes decisiones, como propuso el plan socialista de reforma territorial...

Podemos (ir en contra de los intereses obvios e inmediatos de nuestros miembros), ya que tenemos una cierta autoridad, y además hay unidad sindical. Supongamos que hay otro sindicato: no tardaría en contarles a los agricultores que no están bien defendidos por nuestro sindicato, que harían mejor cambiándose al de ellos. Entonces se ha acabado. De esta manera, van juntas la cogestión y la unidad sindical» (26).

En la práctica, los socialistas se vieron obligados, por la violencia de las reacciones de los agricultores en contra de la política gubernamental, a replegarse y a aceptar una reafirmación *de facto* de los antiguos acuerdos privilegiados con la FNSEA. Michel Rocard sustituyó a la conflictiva Edith Cresson como ministro de Agricultura e intentó dar seguridades a la FNSEA sobre las intenciones del gobierno. Pero ni en las negociaciones con las organizaciones agrícolas, ni en las mantenidas con las asociaciones del *patronat*, donde se llevó a cabo un repliegue semejante, el gobierno refrendó jamás la visión del mundo expresada por Guillaume. Para los socialistas, las fuentes legítimas de autoridad solamente pueden ser instituciones públicas y cargos oficiales electos. Según la visión socialista, la noción de que la concentración del poder en manos de los representantes socioprofesionales pueda conducir al triunfo del interés general sobre los intereses particulares es casi literalmente inconcebible.

CONSECUENCIAS: PAUTAS DE PROTESTA

Los primeros resultados del anticorporatismo del gobierno se reflejaron rápidamente en las movilizaciones ya descritas. Las organizaciones que fueron interlocutores privilegiados de los gobiernos de centroderecha, y las organizaciones rivales, que habían sido excluidas en el pasado, pero a las que ahora se les ofrecía un puesto en la mesa de negociación al lado de los socialistas, tomaron la calle. A medida que crecía la oleada de protestas, aparecían nuevas reivindicaciones. Estas adoptaron formas radicalmente contradictorias. Por una

parte, hubo una multiplicación de reivindicaciones categóricas, presentadas por los grupos de interés que previamente estaban desorganizados o eran relativamente pasivos: camioneros, agentes de viaje, etc. Se produjo una multiplicación de grupos de interés que escaparon a todos los intentos de canalización por parte de los partidos de oposición, o por grandes asociaciones de intereses. La especificidad de las reivindicaciones y la tendencia de éstas a convertirse en demandas cada vez más concretas facilitó relativamente la tolerancia por parte del Estado de estas nuevas movilizaciones de interés. Su gran número creaba problemas, pero en cada caso específico el gobierno solamente tenía que aprender, al igual que lo habían hecho los gobiernos de la Quinta República, a ceder ante los golpes, listo para incorporarse, impasible, una vez que cesara el griterío: con la metáfora actual en el lenguaje político francés, *la strategie de l'edredon*.

Por una parte, nuevas reivindicaciones muy específicas que eran virtualmente imposibles de conjugar; por otra, la aparición de nuevas reivindicaciones que habían sido altamente politizadas, virtualmente desconectadas de las reivindicaciones particulares de cualquier grupo de la población. La comparación del fenómeno Le Pen con el clásico poujadismo es esclarecedora al respecto. Como ha sostenido Jean Pierre Rioux, Poujade representaba ciertas categorías sociales tradicionales amenazadas por la modernización económica. La suerte de Poujade en la Cuarta República, y de la CID-UNATI de Nicod en la Quinta, estaban fuertemente ligadas a la defensa de tenderos, de artesanos y de la clase de pequeños propietarios. Por contraste, el Frente Nacional de Le Pen, que pasó del éxito en una serie de elecciones locales, en ciudades con una gran población inmigrante y tensiones raciales, a un porcentaje triunfal del 11 % en las elecciones europeas (1984), no tiene una base característica social y regional, sino un electorado urbano, interclasista (27). En contraste con los tradicionales movimientos de clase media, que le precedieron por esta senda angosta que conduce entre el fascismo y el populismo, el programa de Le Pen es «puramente» político. El éxito de Le Pen en los últimos años tiene varias causas, entre las cuales no son las menos importantes las altas cifras de desempleo y el estado crítico de los partidos de la oposición, que han fracasado en recobrar el terreno político que la izquierda ha perdido. Pero estudiando la configuración

política de este movimiento racista, xenofóbico, se llega a detectar la silueta del blanco hacia el cual la extrema derecha apuntaba: el proyecto político de la izquierda, el cual se parece al proyecto contrario en su énfasis exclusivo sobre la política, los partidos y el Estado, y en su rechazo de la dinámica social.

Finalmente, el impacto de las estrategias del gobierno sobre las formas de protesta aparece en la imagen con la que empezó este artículo: el vasto movimiento social que se niega a aceptar la integración de las escuelas católicas y demás escuelas privadas en un sistema de regulación que incorporaría gradualmente a las mismas al sector público. En educación, así como en economía, la visión socialista dominante sugería una ampliación de la autoridad pública vía un creciente control por parte de las instituciones y normas del Estado. Con respecto a las escuelas privadas, alrededor del 90 % de las cuales son católicas, y con respecto a las más grandes compañías privadas, los socialistas perciben una serie de problemas cuya única solución es la nacionalización. Hay una creencia muy extendida en Francia de que las escuelas no están funcionando bien: que el sistema educativo ya no es capaz de reproducir los antiguos niveles de capacidad y conocimientos, y que no está bien adaptado a las nuevas necesidades sociales. La intervención propuesta por el gobierno no se centró, sin embargo, en los contenidos de la educación, sino en la transferencia de autoridad que aumentaría el control público.

Hay varias explicaciones sobre por qué los socialistas propusieron una nueva legislación para este polémico tema. Primero, los grupos de presión importantes en el sector socialista (los masones, los sindicatos del profesorado) exigieron que el viejo sueño de la izquierda de un único sistema nacional educativo se realizase por fin. Luego, como las esperanzas socialistas iniciales de unos cambios dramáticos en la economía y el desempleo se esfumaron, y el gobierno recurrió a una política económica que fue virtualmente indistinguible de la del gobierno de centroderecha, el tema escolar suministró una consigna alrededor de la cual se reunían las desanimadas tropas socialistas. El aprovechamiento de este tema para reafirmar la identidad del partido está unido a la forma en que fue utilizado para marginar a ciertos grupos dentro del partido socialista, a la llamada *deuxième gauche*. Situar este tema en una posi-

ción prioritaria en la agenda del gobierno sirvió para reducir el papel de la minoría dentro del partido socialista, ya que muchos de sus integrantes tenían historiales de militancia en organizaciones católicas y fueron por tanto tratados como miembros de «segunda clase» dentro del partido, siempre que se suscitaba la cuestión Estado/Iglesia. Este hecho biográfico se combinaba con la falta de entusiasmo que sentía la *deuxième gauche* hacia la política gubernamental, cuyo objetivo central era la expansión del Estado y la reducción de la esfera de la autonomía privada o social. En efecto, en este sentido, el tema escolar ha servido para reforzar la hegemonía dentro del partido de la visión según la cual la transformación social y política se apoya sobre el poder y las instituciones del Estado. La reafirmación de uno de los antiguos objetivos de la izquierda ha servido para alterar las relaciones de poder dentro del partido.

La propuesta de incrementar el control estatal sobre la educación privada produjo una oleada de protestas, que es fundamentalmente diferente de cualquiera de las anteriores movilizaciones de rechazos acerca de las escuelas. El viejo vino del conflicto Iglesia/Estado ha sido decantado verdaderamente en nuevas botellas. Este tema, que constituyó durante mucho tiempo el objetivo principal de la controversia izquierda/derecha, ha escapado ahora de las manos de todas aquellas organizaciones que una vez lo definieron y controlaron. Los que participaban en la protesta han obligado sin ceremonias a los políticos de los partidos de oposición a acudir a las manifestaciones como personas privadas. Ni siquiera la jerarquía eclesiástica controla ya las manifestaciones, aunque sus instituciones y personal han sido utilizados para comunicar los *mots d'ordre*, y para transportar a los manifestantes a los mítines. Los recursos organizativos de este vasto movimiento están en su mayor parte en manos de los seglares, cuya respuesta a las propuestas de los socialistas ha sido bastante más desafiante que la de los obispos. En el pasado los creyentes protestaban en contra de la legislación republicana sobre las escuelas con *slogans* elegidos por la jerarquía, marchaban en procesión bajo el estrecho mando de la autoridad eclesiástica y pertenecían a asociaciones con estructuras sólidas, permanentes y de larga vida. Hoy en día, la manera de participar de aquellos que se oponen a los proyectos de educación, las relaciones entre los organizadores y los seguidores, las intensas explosiones de adhesión por parte de los

participantes que luego se dispersan, están todas dentro de los nuevos modelos de movilización social que reúnen en todas partes de Europa a los participantes en protestas antinucleares, feministas, ecologistas y similares, y están muy lejos de las manifestaciones de los católicos en el pasado (28). Muchos observadores, incluido el arzobispo de París, vieron el 24 de junio de 1984 como «una versión tranquila del mayo del 68» (29). Para explicar la extraordinaria resonancia de este tema, no es suficiente con argüir una continuidad histórica, y considerar a los manifestantes actuales como otra manifestación de la clásica y conservadora derecha católica. Aquí también el proyecto de los que protestan tiene relación con el proyecto del gobierno, aunque de una manera totalmente distinta de la señalada en el caso de Le Pen. Las grandes corrientes sociales que propugnan un mayor control sobre la vida de cada cual y su entorno, que en otras partes de Europa se expresan por el movimiento ecologista, los «verdes» y otros de entre los nuevos movimientos sociales, en Francia habían aflorado previamente en oleadas de apoyo y optimismo hacia el socialismo. El partido socialista había reconocido, nutrido y dado esperanzas a un conjunto de deseos ampliamente extendidos de nuevas formas de participación democrática y autonomía en el control de la vida cotidiana. Los *slogans de autogestión*, aunque imprecisos y discutidos dentro del partido a partir de otros puntos de vista, fueron, no obstante, enormemente importantes en la conquista socialista del terreno político que en otras sociedades industriales avanzadas había escapado del control de todos los partidos, y formado la base de los nuevos movimientos sociales. Eran estas aspiraciones y *slogans* los que ahora se volvían en contra de los mismos socialistas. Habiendo perseguido desde el poder una serie de objetivos que derivaban enteramente de un modelo de cambio institucional y estatal, los socialistas habían desilusionado a numerosos grupos de la población perteneciente a la moderna clase media. Estas esperanzas frustradas de un aumento de la autonomía personal y social fueron galvanizadas por la intervención socialista en un punto que casi doscientos años de historia francesa habían señalado como un crítico límite exterior del poder del Estado. Mediante un extraño proceso, aunque bastante frecuente, por el cual las nuevas demandas sociales son llevadas a la acción por medio de antiguas reivindicaciones políticas, la demanda de *autogestión*, ahora ampliamente abandonada por los socialis-

tas, ha sido utilizada como emblema de los manifestantes sobre la educación (30).

CONCLUSIONES

Analizando la fortuna decreciente de los socialistas franceses desde 1981, muchos observadores han puesto gran énfasis en los fracasos de la política económica. Es indudablemente cierto que el futuro político de los socialistas sería bastante más brillante si hubieran sido capaces de reducir el desempleo, reforzar el crecimiento y mantenerse dentro de unos límites tolerables de inflación y balance económico. Pero dejando aparte este escenario, poco probable, las dificultades actuales más serias de los socialistas parecen provenir tanto de su política como de sus cálculos económicos equivocados. Las estrategias socialistas anticorporatistas y, más ampliamente, su decisión sobre la expansión de la esfera de la autoridad estatal, no recogen ni los imperativos latentes en la crisis económica, ni las exigencias de las coaliciones de clase. Son más bien el producto de un esquema político deliberado. Las consecuencias, que hemos tratado de mostrar, son movimientos de protesta y movilizaciones antisocialistas que han debilitado seriamente la autoridad del gobierno.

Esta interpretación sugiere preguntas de difícil respuesta sobre el desarrollo político en cualquier parte de Europa Occidental. Si es cierto que el corporatismo está, en general, en declive, como otros afirman y nosotros estamos de acuerdo, ¿cuáles serán las consecuencias políticas? ¿Hemos entrado, como afirman Carrieri y Donolo, en una nueva fase del ciclo político, con una lógica totalmente distinta de la de los quince años precedentes? (31). Dando por supuesto que la desmovilización o el consenso social respecto a la política gubernamental eran el resultado de un momento neo-corporatista, ¿significará la superación de este momento un aumento de los disturbios políticos? ¿O, como han sugerido Carrieri y Donolo, hay por el contrario una tendencia al fortalecimiento de la autoridad política con la aparición de un «populismo autoritario»? Acaso «il teorema dello sganciamento dalla dipenza verso le pressioni sociali» implica la llegada de un Estado más fuerte, más autónomo, en toda Europa Occidental, y un período de estabilidad política? (32).

El curso de los acontecimientos en Francia desde 1981 sugiere conclusiones bastante diferentes. Las estrategias políticas de los socialistas han reducido su electorado hasta unas cifras inferiores a las de la izquierda tradicional. Los votantes de la nueva política se encuentran ahora protestando en las calles o en casa. Incluso con todas las ventajas que ofrece un régimen presidencial con tendencias plebiscitarias, con una tradición «estátista» y con las experiencias recientes del gaullismo, Mitterrand ha sido incapaz de crear unas conexiones directas con el pueblo que pudieran sustituir a los proyectos y organizaciones políticas. Más bien, los proyectos políticos que los socialistas han seguido han envenenado el terreno en el cual podría haber echado raíces la legitimidad política. Este resultado no refleja los límites de la autonomía del Estado, sino los límites de la visión política.

NOTAS

(*) Traducción de Language Consultancy Service, revisada por la Redacción de PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA.

(1) Sidney TARROW, «Il movimenti degle anni 60 in Italia e Francia e la transizione al capitalismo maturo», en *Stato e Mercato*, n.º 12, diciembre de 1984.

(2) Alfredo GIGLIOBIANCO y Michele SALVATI, *Il Maggio Francese e l'Autunno Caldo Italiano: La riposta di due borghesie*, Bologna, Il Mulino, 1980.

(3) Philippe C. SCHMITTER, «Reflections on Where the Theory of Neo-Corporatism Has Gone and Where the Praxis of Neo-Corporatism May Be Going», en Gerhard LEHMBRUCH y Philippe C. SCHMITTER, ed. *Patterns of Corporatist Policy-Making*, Beverly Hills, Sage, 1982, pág. 262. Sobre la cuestión del corporatismo en Francia, ver Frank L. WILSON, «French Interest Group Politics: Pluralist or Neocorporatist?», *American Political Science Review*, vol. 77, n.º 4 (diciembre 1983).

(4) Peter LANGE, «Labor, Workers, and Wage Regulations in Advanced Industrial Democracies»: The Rational Bases of Consent», en John Goldthorpe, ed., *Order and conflict in Western Capitalism*, Oxford: O.U.P.

(5) Ver Suzanne BERGER, «The Socialists and the Patronat: Dilemmas of Coexistence in a Mixed Economy», papel presentado a Pickles Memorial Colloquium, London School of Economics, 7 de junio de 1984.

(6) La mejor descripción de este sistema corporatista está en John T. S. KEELER, «Il Corporativismo e l'egemonia del sindacato ufficiale: il caso del sindacalismo agricolo francese», en Suzanne BERGER, ed. *L'organizzazione degli interessi nell'Europa Occidentale*, Bologna, Il Mulino, 1983 (ed. orig. 1983).

(7) Sobre la política socialista con respecto a las organizaciones agrícolas, ver John T. S. KEELER, «Agricultural Reform in Mitterrand France», en John S. AMBLER, ed. *The French Socialist Experiment*, Philadelphia, Instituto para los Estudios de Situaciones Humanas, 1984.

(8) *Le Monde*, junio, 5, 1981, citado en KEELER (1984), pág. 15.

(9) El SNPMI fue fundado a partir de la escisión dentro de la or-

ganización «oficial» para la pequeña y mediana empresa, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) en 1977. Desde entonces, sus relaciones con ambas, la CNPF y la CGPME, han sido bastante tensas. El SNPMI ha sido ahora rebautizado como Syndicat National du Patronat Moderne et Indépendant.

(10) Pierre BÉRÉGOVOY, entonces secretario General de l'Elysée, declaró en un Congreso nacional del SNPMI que el gobierno no se negaría a negociar con ninguna de las organizaciones profesionales representativas y prometió que el SNPMI tendría voz en las negociaciones acerca del horario de trabajo semanal. Para una ampliación de este tema, ver Jean-Gabriel FREDET y Denis PINGAUD, *Les Patronats face à la gauche*, París, Ramsay, 1982, pág. 90.

(11) *Le Monde*, 10 de diciembre de 1982. El SNPMI ganó casi la tercera parte de los votos en la industria.

(12) Ver KEELER (1984), pág. 39.

(13) *Le Monde*, 15 de septiembre de 1982 y 20 de octubre de 1982.

(14) Los nuevos comportamientos aparecieron en la CFDT y la CGT, en absoluto en la FO, cuyo éxito parece estar relacionado de hecho con su negativa a apoyar la política gubernamental.

(15) Leo PANITCH, «The development of Corporatism in Liberal Democracies», en Philippe, C. SCHMITTER and Gerhard LEHMBRUCH, eds. *Trends Toward Corporatist Intermediation*, Beverly Hills, Sage, 1977, págs. 142 y ss.

(16) Alfred SAUVY, *De Paul Reynaud à Charles de Gaulle, un économiste face aux hommes politiques 1934-1967*.

(17) FOURQUET, pág. XXIII.

(18) ANDREW SHONFIELD, *Modern Capitalism: The Changing Balance of Public and Private Power*, Londres, Oxford University, 1965; Andrea BOLTHO, ed., *The European Economy: Growth and Crisis*, Oxford University Press, 1982, págs. 9-37.

(19) Sobre dualismo ver Suzanne BERGER y Michael PRIORE, *Dualismo económico e política nelle società industriali*, Bolonia, Il Mulino, 1982 (ed. orig. 1980). Sobre corporatismo y dualismo como formas alternativas de respuesta en una sociedad industrial avanzada, ver John H. GOLDTHORPE, «The End of Convergence: Corporatist and Dualist Tendencies in Modern Western Societies», en John H. GOLDTHORPE, ed., *Order and Conflict in West European Capitalism*, Oxford, Oxford University Press, de reciente publicación.

(20) Entrevista en Grenoble, 1957.

(21) Ver sección V en Sidney TARROW, op. cit.

(22) Aunque el influjo de los militantes del PSU y de la CFDT

después de los Assises de Socialisme fortalecieron a la segunda, su atractivo perdió más fuerza en el partido que en el pueblo. Una prueba: la debilidad de Rocard en el partido, su fuerza en la opinión pública.

(23) Sobre la importancia de las reformas descentralizadoras para la distribución del poder ver Yves MÉNY, «Descentralisation in Socialist France: The politics of Pragmatism», *West European Politics*, vol. 7, n.º 1 (enero 1984).

(24) MÉNY, págs. 66-70-71.

(25) Entrevista de Guillaume con Emmanuel LE ROY LADURIE, *Le Débat*, n.º 28 (enero 1984), pág. 62.

(26) GUILLAUME, págs. 62-63.

(27) Jean-Marie RIOUX, «Le Pen, fils illégitime de Poujade», en *Liberation*, 18 de junio 1984.

(28) Los rasgos característicos de estos nuevos movimientos sociales, que Claus OFFE destaca en «New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics», en Charles MEYER, ed., *Changing Boundaries of the Political*, New York, Cambridge University Press, de reciente publicación, todos ellos pueden encontrarse en este movimiento francés.

(29) Arzobispo de París Lustiger, citado en *Liberation*, 30 de junio-1 de julio de 1984.

(30) Después de las manifestaciones, el arzobispo Lustiger habló sobre la autogestión comunitaria de los colegios católicos, que debería ser extendida a los colegios públicos. Ya en una confrontación anterior a las elecciones legislativas de 1978, entre los defensores de los colegios católicos y Mitterrand, los primeros habían señalado amargamente que siendo personas que hablaban tanto de autogestión, era raro que propusieran su eliminación en uno de los pocos casos en los que existía en la sociedad francesa. (Minutos que se citan textualmente del encuentro organizado por La Brèche, un grupo católico, con los socialistas sobre el tema «Des chrétiens interrogent des socialistes», 23 de noviembre de 1977).

(31) Sobre el declive del corporatismo y sus consecuencias políticas, ver Mimmo CARRIERI y Carlo DONOLO, «Oltre l'orizzonte neocorporativista», *Stato e Mercato*, n.º 9 (diciembre 1983). Para una exposición de los obstáculos para la reestructuración económica inherentes al neo-corporatismo, por consiguiente de la incompatibilidad del neocorporatismo y estrategias eficaces para la crisis, ver Víctor PÉREZ-DÍAZ, «Políticas económicas y pautas sociales en la España de la transición: la doble cara del neocorporatismo», en J. LINZ (ed.), *España: un presente para el futuro*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1984.

(32) CARRIERI y DONOLO, pág. 489.